



# El apagón de la política

**C**omo se podía anticipar desde que comenzó la emergencia, el apagón del martes 25 ha dado lugar a un fuerte cruce de opiniones e imputaciones entre el Gobierno y la oposición: mientras el oficialismo ha puesto el foco en las culpas de las empresas involucradas —dirigentes de la coalición han planteado la creación de una industria eléctrica estatal o la nacionalización de la existente—, la derecha ha afirmado que el corte obedeció a un clima adverso a la inversión privada.

En la noche del martes, el Presidente Boric —junto con señalar que “lo ocurrido hoy nos indigna y no es tolerable”— aseguró que “vamos a actuar con firmeza frente a las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias”. Si bien en la jornada misma del 25 la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, escribió que “ya habrá momento de establecer las responsabilidades”, al día siguiente acusó que “quienes hoy son Gobierno han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”.

La falla que causó el apagón se originó en la línea de transmisión de ISA Interchile que transporta energía desde el norte al res-

## “Antes que repartir culpas, al Gobierno y la oposición les corresponde acordar mecanismos para robustecer las capacidades del sistema eléctrico”.

to del país; aunque la empresa ha explicado que solucionó el problema 44 minutos después —hay una disputa técnica sobre si se trató de un período de respuesta excesivo o no—, otros componentes de la red también habrían fallado en cadena, lo que amplió la extensión del corte por encima de lo previsto en los protocolos.

La envergadura del apagón y la demora en la reposición del servicio ha profundizado el examen sobre la fragilidad del sistema eléctrico, la necesidad de acelerar las inversiones, particularmente en transmisión y almacenamiento, la resiliencia de la red y la introducción de mejoras en la institucionalidad.

En estas páginas, el exdirector de la Asociación de Empresas Eléctricas Rodrigo Castillo ha indicado que hay una deuda con normas que promuevan la seguridad del sistema, porque en las últimas administraciones gran parte de la discusión política se

ha centrado en el aumento de multas y sanciones a la industria; para el académico de la UC Samuel Córdova, el debate ha estado enfocado en los precios de la energía y no en la seguridad de la red.

En este contexto, el enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno no contribuye a abordar los problemas del sistema eléctrico con la racionalidad y la perspectiva de largo plazo que se requieren; la reacción de la política al apagón ha estado dominada por una batería de eslóganes y actitudes que bordean el oportunismo y que, además, carecen de datos y evidencia que los sustenten. Por lo mismo, tampoco ofrece soluciones realistas a los problemas legislativos, regulatorios, económicos y de infraestructura asociados con el suministro de energía.

La función de la política es orientar y conducir a la sociedad, no sumarse a la polarización o a la subjetividad de la indignación, más aún si, como han subrayado distintos observadores, la política tiene responsabilidades en la actual configuración de la industria eléctrica. Antes que repartir culpas, al Gobierno y la oposición les corresponde acordar mecanismos para robustecer las capacidades del sistema eléctrico en línea con las recomendaciones, bastante consensuales, que se han planteado en distintos niveles.